

Los Ángeles, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

**VISTOS:**

Que ante este Tribunal se llevó a efecto audiencia de juicio en procedimiento de aplicación general en los autos Rit N° O-100-2020, compareciendo doña **MARINA ONETTH CUEVAS MERA**, paradocente, domiciliada en calle Temuco número 421 de esta ciudad, legalmente asistido por el abogado don Jorge Segura Slimming, y la demandada **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES**, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su Alcalde don **Esteban Krause Salazar**, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en calle Caupolicán número 399 de esta comuna, legalmente asistida en juicio por el abogado don Rodrigo Jara Fernández.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que doña Marina Onetth Cuevas Mera interpuso demanda en procedimiento de aplicación general por indemnización de perjuicios por accidente del trabajo en contra de Ilustre Municipalidad de Los Ángeles, representada legalmente por su Alcalde don Esteban Krause Salazar, solicitando en definitiva declarar en definitiva que sea condenada a pagar los siguientes cánones:

- a) Por concepto de daño moral: que la demandada sea condenada al pago de \$60.000.000 en moneda de curso nacional, o la suma mayor o menor que el Tribunal determine conforme al mérito del proceso más reajustes e intereses.
- b) Costas, intereses y reajustes de esta causa.

Indica que ingresó a prestar servicios bajo vínculo laboral como paradocente, en el liceo A-59 de esta ciudad, conocido también como Liceo Bicentenario, ubicado en avenida Ricardo Vicuña número 0320 de esta comuna el 01 de marzo de 2002, siendo su empleadora la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles.

Agrega que sus actividades laborales consisten en supervisar el ingreso de los docentes y alumnos a las salas de clases en los



horarios respectivos, revisión diaria de la asistencia de los alumnos, cuya tarea consiste en recoger todos los libros de clases de cada curso del pabellón respectivo, la anotación de anotaciones positivas y negativas de los libros de clase al sistema SIGE.

Relata que desde el inicio de la relación laboral no fue instruida ni capacitada respecto a los riesgos laborales que involucraba sus labores, tampoco respecto a los riesgos de caídas en el desempeño de sus funciones.

Manifiesta que el 05 de agosto de 2019 a las 10:20 horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraba efectuando sus labores diarias de retiro de los libros de clases para realizar la revisión de la asistencia de los alumnos, y al ingresar a la sala donde ejercía funciones la docente doña Perla Méndez, aquella le entrega el libro de asistencia del curso, sosteniéndolo junto con otros libros con ambos brazos y apoyados en el pecho -ya que estos tienen un peso y tamaño que no facilita el uso con una sola mano o brazo- y al salir de la sala tropieza con un guardapolvo de la puerta de lata, el cual se encontraba en malas condiciones, ya que se encontraba levantado en su escritura, cayendo e impactando en la pared de concreto del pabellón con la parte izquierda de su rostro.

Sostiene que el referido desperfecto en el piso, lo reportó en reiteradas ocasiones, no realizándose reparación alguna por su empleador, y no tomando medida de seguridad alguna para prevenir el accidente que sufrió.

Expone, en cuanto a la dinámica del accidente, que se encontraba realizando funciones en un lugar de trabajo que no tenía las condiciones mínimas de seguridad, sumado al hecho que debía cargar una gran cantidad de libros de gran volumen y peso, que le impedía realizar sus labores con seguridad, o tener al menos un brazo libre de apoyo en caso de una caída.

Señala que producto de la caída relatada, tuvo las siguientes lesiones:



- Fractura cerrada de humero proximal izquierdo. Epífitis superior cerrada.
- Fractura cerrada olecranon derecho.
- Rigidez articular leve de codo derecho.
- Dolor crónico leve de codo derecho.

Indica que la repuesta de su empleador no fue la adecuada en cuanto a la reacción post accidente, ya que luego de varios minutos se tomó la determinación tardía de derivarle al hospital de Los Ángeles en ambulancia, sin embargo, esto es lo relatado por los demás funcionarios del Liceo, ya que producto de la caída y la gravedad de ésta, perdió la consciencia.

Agrega que luego de retomar el conocimiento, recuerda que el mismo día le enyesaron el codo y el antebrazo derecho, siendo enyesada en varias oportunidades y derivada a la clínica Los Andes. Al día siguiente fue trasladada en ambulancia hacia Santiago para ser atendida, debido a la gravedad de su accidente.

Relata que los defectos no previstos por el empleador en el área de trabajo y en la planificación de este, son los siguientes:

- a) El no contar con un área de trabajo segura, no reparando la estructura dañada del guardapolvos del piso.
- b) El no contar con el piso libre de obstáculos para evitar caídas.
- c) El no contar con una planificación de su trabajo diario, a fin de evitar caídas.

Manifiesta que una vez ocurrido el accidente, y las graves fracturas sufridas, al ver la gravedad de las lesiones, entró en estado de “shock.” En esos instantes se percató de lo poco preparada que estaba su empleador para afrontar un accidente de esta naturaleza.

Sostiene que debe hacer presente que el accidente descrito es de origen laboral, ya que al momento de producirse se encontraba efectuando sus labores dentro de su jornada laboral.

Expone que el accidente se produjo principalmente por la nula preocupación del empleador en cuanto a tomar las medidas de



seguridad requeridas, particularmente el hecho de que existía un obstáculo no reparado.

Señala que entre la omisión por parte del empleador de tomar las medidas de seguridad necesarias, cabe hacer presente que el día del accidente no había de cuerpo presente en la empresa un experto en prevención de riesgos. Tampoco existía un procedimiento de trabajo seguro para las actividades que realizaba.

Indica que al día siguiente de sucedido el accidente, luego de haber sido enyesada en tres oportunidades y ser derivada en una oportunidad a la clínica Los Andes, atendida la gravedad de las lesiones, fue trasladada desde el hospital de Los Ángeles, al hospital del Trabajador de Santiago, donde se fue evaluada por equipo especializado en hombro, realizándose recién su primera intervención quirúrgica el 19 de agosto de 2019, donde se realiza una dolorosa intervención de reducción y fijación de la fractura con placa metálica.

Agrega que después del alta operatoria, fue reevaluada e intervenida nuevamente el 27 de agosto de 2019, donde se realiza reducción y fijación con clavo endomedular.

Relata que la reducción es un procedimiento en virtud del cual se manipula la fractura para mantener la estructura ósea en posición de ser favorable a la cicatrización, y con el objeto de aplicar un dispositivo (placa, clavo endomedular), con el objeto de fijarla.

Manifiesta que el segundo día se fue a Santiago, estando hospitalizada en el hospital del trabajador, por cerca de diez días siendo operada el 19 de agosto de 2019, realizándose procedimiento quirúrgico, consistente en la instalación de una placa de metal en el brazo.

Sostiene que también fue intervenida en su brazo derecho, teniendo actualmente una cicatriz de veinte centímetros en el brazo y de unos ocho centímetros en el hombro, producto de las intervenciones.



Expone que es preciso hacer presente que estuve cerca de un mes hospitalizada, período en que y con posterioridad, tomé fuertes medicamentos para disminuir los dolores, tales como tramadol, meloxicam, paracetamol, entre otros.

Señala que actualmente no puede llevar una vida normal, siendo fuertes dolores al hacer actividades cotidianas tales como bañarse. Otras funciones tales como cocinar, hacer aseo, lavar ropa, entre otras labores domésticas no las puedo realizar, por lo que se vio en la forzosa situación de contratar a alguien que realizase estos servicios.

Indica que por lo anterior se ha determinado el porcentaje de incapacidad en la Asociación Chilena de Seguridad, éste a lo menos, atendida la gravedad de las lesiones, el cual fue del doce coma cinco por ciento, sin perjuicio que se encuentra en proceso de apelación del referido porcentaje ante la comisión médica, ya que al día de hoy aun no siento mejoría, ni se siente capaz para volver a trabajar.

Agrega que el accidente que sufrió se debe única y exclusivamente al hecho que su empleador le obligó realizar sus funciones, en un área de trabajo insegura, sin adoptar todas las medidas de seguridad necesarias, además sin recibir capacitaciones respecto a los planes de trabajo.

Relata que con todo lo ya señalado, queda en evidencia que la demandada le expuso al accidente sufrido, no cumpliendo con el deber de tomar todas las medidas de seguridad tendientes a proteger su integridad física y su vida, situación que se refleja en los siguientes hechos:

- a) Nunca recibió capacitación específica por parte de su empleador para ejercer sus labores.
- b) Nunca recibió charlas de seguridad sobre las funciones que realizaba al momento del accidente, ni tenía conocimiento sobre el procedimiento de trabajo seguro para estas labores.
- c) Nunca se le entregó documento alguno relativo del Derecho a Saber Decreto Supremo 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión



Social, respecto de la función que se encontraba realizado el día del accidente.

d) Adicionalmente a lo ya expuesto, la demandada incumplió con su obligación de seguridad al no reparar un obstáculo en el suelo, el cual ocasionó el accidente sufrido.

Manifiesta que el daño moral se configura, en el caso de marras, por las siguientes categorías o especies de daños morales:

a) Daño corporal: Producto del accidente laboral sufrido se produjeron los siguientes daños morales:

- Fractura cerrada de humero proximal izquierdo. Epífisis superior cerrada.
- Fractura cerrada olecranon derecho.
- Rigidez articular leve de codo derecho.
- Dolor crónico leve de codo derecho.

Sostiene que lo anterior consta en ficha médica de la Asociación Chilena de Seguridad que se acompañará en la etapa procesal correspondiente.

b) Daño emocional o pretium doloris: Actualmente sufre de un trastorno de estrés post-traumático, depresión, sentimientos de angustia, debido a las secuelas psicológicas provocadas por el accidente, como son; trastorno de adaptación, pérdida de autoestima, crisis de pánico reiterativas, sentimientos de angustia y pesar, miedo a cualquier elemento externo que provoque recuerdos de su oficio y particularmente del accidente.

Expone que sus relaciones interpersonales se han visto perturbadas por su mal estado de ánimo y estado depresivo, las secuelas le han generado afecciones que dicen relación con su autoestima y por ende en su relación con los demás.

Señala que antes de la ocurrencia del accidente era una mujer sana y de carácter alegre, se desplegaba físicamente y emocionalmente de manera satisfactoria en el desempeño de su rutina. No puede desde el accidente ejercer labores domésticas,



cocinar, hacer aseo, entre otras debiendo contratar una persona para que realizase tales labores.

c) Daño estético: A raíz del accidente, ya no es la misma, las cicatrices y marcas del accidente son evidentes, no puedo ejercer fuerza alguna con el brazo, modificándose negativamente el aspecto físico de su brazo atendidas las cicatrices que dejaron sus intervenciones quirúrgicas, una enorme de veinte centímetros en el brazo y otra de ocho centímetros en el hombro.

Indica que todo lo anterior es consecuencia directa del incumplimiento del empleador en orden a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud del trabajador, como lo dispone el artículo 184 del Código del Trabajo, ya que, de haber existido medidas preventivas tales como la mantención de los suelos, y planificación de los programas de trabajo, se hubiese aminorado la posibilidad de un accidente.

Agrega que es necesario establecer que el accidente jamás hubiere ocurrido de no mediar negligencia de su empleador en cuanto a adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir el accidente que sufrió.

Relata que por lo anterior es evidente que entre la negligencia o culpa del empleador y en enorme daño que sufrió existe una relación de causalidad.

Manifiesta que la responsabilidad de reparar los daños y perjuicios económicos producidos por estos conceptos es del empleador, según se desprenden de las siguientes disposiciones legales:

a) Artículo 5 de la ley 16.744: “Para todos los efectos de esta ley se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.

Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo, y



aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro.”

b) Artículo 184 del Código del Trabajo: “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”, por lo que mediante esta disposición legal el empleador responde hasta por culpa levísima en el cumplimiento del deber de protección u obligación de seguridad, exigible a su respecto.

c) Artículo 69 de la ley 16.744 hace responsable de las indemnizaciones pecuniarias tanto al empleador directo como a la empresa principal, resultado de un accidente laboral, incluyendo dentro de las reparaciones el daño moral.

d) Artículo 1.556 del Código Civil, que comprende la indemnización del daño emergente y el lucro cesante, no excluye de un modo forzoso la reparación del daño meramente moral, como quiera que no se ha dicho allí que la indemnización sólo comprenda o abarque los señalados rubros, caso en que quedaría marginada cualquiera otra consecuencia lesiva, derivada de un incumplimiento o del cumplimiento imperfecto de obligaciones emanados de un contrato.

e) Artículo 1.547 inciso tercero del Código Civil, establece “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que debía emplearlo.”

f) Artículo 1.545 del Código Civil dispone: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”

g) Artículo 2.329 del Código Civil que versa sobre los delitos y cuasidelitos contempla algunos casos en que particularmente se consagra el deber de indemnizar bajo el encabezamiento “por regla





general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.”

h) Número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cabe hacer presente que la reparación de los daños extrapatrimoniales que se demandan en este libelo, constitutivos de daño corporal, pretium doloris, encuentran su fundamento en lo dispuesto en esta norma, ya que asegura a todas las personas su integridad física y psíquica, asidero constitucional que fundamenta la reparación del daño moral en cualquier ámbito de la responsabilidad civil en que este daño entre el juego, en el caso de marras, el contractual.

i) Decreto Supremo de Salud número 594/99, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo, dispone en su artículo “La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean estos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella.” El artículo 36 preceptúa “Los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y todas las maquinarias, instalaciones, así como las herramientas y equipos, se mantendrán en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas. El inciso primero del artículo 37 reza “Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores.” El artículo 38 establece “Deberán estar debidamente protegidas todas las partes móviles, transmisiones y puntos de operación de maquinarias y equipos.”

j) Decreto Supremo 40/69 del Trabajo, dispone en su artículo 21 “Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa...”. Por su parte, el artículo 22 preceptúa “Los empleadores



deberán mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo.”

k) Artículo 161 bis del Código del Trabajo “La invalidez, total o parcial, no es justa causa para el término de contrato de trabajo. El trabajador que fuere separado de sus funciones por tal motivo, tendrá derecho a la indemnización establecida en los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, con el incremento señalado en letra b) del artículo 168.”

l) Inciso primero del artículo 177 del Código del Trabajo, el cual prescribe “El finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito. El instrumento respectivo que no fuere firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical respectivos o que no fuere ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador.”

Sostiene que del total de las indemnizaciones adeudadas e individualizadas más adelante, es responsable la demandada Ilustre Municipalidad de Los Ángeles.

Expone que los bienes extrapatrimoniales de una persona como el honor o la fama, tienen un valor que de ordinario sobrepasa el de los bienes materiales, con mayor razón si se tratara de la salud o la integridad física y psíquica, de modo que si con respecto a los perjuicios o daños causados por un delito o cuasidelito civil, la jurisprudencia ha dado cabida desde hace tiempo a la indemnización del daño exclusivamente moral, no se divisa el motivo que justifique que se la niegue si la lesión a esos intereses extrapatrimoniales procede de la defección culpable o maliciosa de uno de los contratantes.

Señala que es del caso señalar que entre las orientaciones básicas de la Carta Fundamental se encuentra el número 1 del artículo 19, a través del cual se asegura no sólo el derecho a la vida, si no, a la mencionada integridad física y psíquica de la persona. Éstas últimas,



como en el caso de autos, se ven trastornadas. El mismo comentario cabe hacer con referencia al artículo 4 del mismo artículo 19 de la Constitución Política, en cuanto declara que el Estado está al servicio de la persona humana y que su finalidad es promover el bien común para lo cual debe contribuir a crear condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Indica que esta concepción filosófica corresponde a una corriente de pensamiento universal, como se desprende de las declaraciones contenidas en diferentes acuerdos internacionales. Así por ejemplo en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5 consigna “Toda persona tiene Derecho a la protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, reputación y a su vida privada y familiar.” Lo mismo consigna el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 11 en cuanto a que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

Agrega que aun en otros países la jurisprudencia ha sido más categórica y uniforme en este camino hacia la plena reparación. Así lo refiere el jurista don Fernando Fueyo en su libro “Cumplimiento e Incumplimiento de las Obligaciones” (Editorial jurídica, año 1991), en Francia, por ejemplo, a partir de un texto que en términos generales contiene la idea de que debe repararse el daño (artículo 1382) la doctrina y jurisprudencia han elaborado una acabada teoría sobre la indemnización, que comprende tanto el caso de la responsabilidad contractual como la extracontractual y aún la precontractual. A contar de 1924 aproximadamente se advierte igual consideración de la materia de la reparación de este daño (moral), tanto en el campo extracontractual como en el contractual.

Relata que sin perjuicio de las prestaciones de seguridad social que establece la ley 16.744, si hay culpa o dolo del empleador o de un tercero, tanto el trabajador como los terceros perjudicados pueden



demandar indemnizaciones para reparar el daño causado por el accidente del trabajo.

Finalmente manifiesta que no obsta a la cobertura de prestaciones médicas por parte del organismo administrador del seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La responsabilidad del empleador por incumplimiento a su obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, como prescribe el artículo 184 del Código del Trabajo.

**SEGUNDO:** Que don Rodrigo Alberto Jara Fernández, abogado, en representación de Ilustre Municipalidad de Los Ángeles, solicita tener por contestada la demanda en los términos expuestos y, en definitiva, rechazar la demanda de indemnización de perjuicios por accidente de trabajo en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Indica que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 452 del Código del Trabajo su representada viene en negar categóricamente todos y cada uno de los hechos contenidos en la demanda, en especial los siguientes:

- a) No es efectivo que el hecho denunciado haya ocurrido como la demandante relata.
- b) No es efectivo que el accidente de deba a la negligencia o culpa de su mandante.
- c) No es efectivo que la demandante haya desempeñado sus funciones en áreas de trabajo inseguras sin las medidas de seguridad que dispone el ordenamiento jurídico, como asimismo, tampoco es efectivo que su representada haya infringido la obligación moral-legal de proteger la integridad física y la vida de la demandante.

Agrega no ser efectivo que la demandante haya reportado a la dirección del establecimiento educacional, en alguna ocasión siquiera, algún desperfecto en las puertas o pisos de las salas de clases.



Relata que primeramente, es necesario precisar que el 05 de agosto de 2019, a las 10:30 horas aproximadamente, la demandante doña Mariana Cuevas, en pleno desempeño de sus funciones propias de asistente de la educación, procedió a retirar del aula el libro de clases con el propósito de registrar la asistencia diaria de los alumnos del segundo año B, de enseñanza media. Luego, al cruzar el umbral de la puerta de la sala, según su relato, habría tropezado con la cubrejunta de aluminio adherida al piso. Cabe señalar que, no obstante que la cubrejunta se encontraba levemente levantada la causa determinante del tropiezo se debió más bien a la costumbre que tienen algunas personas de caminar arrastrando los pies, circunstancia que unido a que cargaba el libro de clases con sus brazos apoyados en su pecho -tal como se describe en el libelo- hecho que, obviamente no le permitió mantener la visión panorámica ideal del lugar donde se desplazaba, lo que en definitiva derivó en que doña Marina rozara con la punta de su pie la cubrejunta metálica y cayera de bruces golpeándose con el muro del pasillo.

Manifiesta que en efecto, la demandante tropezó a causa de su desplazamiento sin el debido cuidado y atención. Lo anterior teniendo en cuenta que hay casos de personas que han tropezado o resbalado en condiciones normales, y no necesariamente producto de un hecho o elemento externo a su propio andar. Por lo mismo, no deja de llamarnos la atención que la entrada a la sala de clases en cuestión es una zona enormemente transitada por alumnos, docentes y asistentes de la educación y nadie más haya tropezado, perdido el equilibrio, o caído en ese lugar, a causa de la mencionada cubrejunta.

Sostiene que por otra parte, cabe precisar que la demandante al momento del accidente sólo llevaba el libro de clases retirado recientemente, dado que los otros libros los cargaba doña Juana Wentén, quien la acompañaba en ese instante con el propósito de evitar la carga excesiva de libros.



Expone es necesario mencionar que el establecimiento educacional en el cual se desempeña la demandante se emplaza sobre una estructura sólida de más de mil metros cuadrados, que cuenta con sus mantenciones de techumbres, muros, pisos, ventanas, puertas etc., efectuadas permanente, por lo que se trata de un edificio que se encuentra en óptimas condiciones de acoger en sus aulas a más de mil alumnos. Las permanentes mantenciones son ejecutadas por un equipo de maestros que forman parte de la dotación del establecimiento, además, cooperan con las mantenciones los funcionarios de la unidad de obras de la Dirección Comunal de Educación dependiente de la Municipalidad de Los Ángeles, de manera tal que, el liceo Bicentenario cuenta con una infraestructura de primer nivel.

Señala que por otra parte, de la lectura de la demanda de autos, queda la impresión que su representada es absolutamente descuidada y negligente en el cumplimiento de sus obligaciones -legal y moral- de cuidar la vida y salud de todos sus trabajadores. A este respecto, es preciso hacer algunas reflexiones. La primera es que el hecho de ocurrir un accidente, como el que aconteció a la demandante, no demuestra, por el sólo hecho de haber ocurrido dicho accidente, un especial descuido o negligencia de parte de su mandante. En muchas ocasiones, los accidentes son infortunios causados por situaciones no previstas (caso fortuito o fuerza mayor), como aconteció en la especie y no por negligencia de su representada.

Indica que la segunda de las reflexiones dice relación con la actitud adoptada por su mandante. En la etapa procesal pertinente, se demostrará que una de las preocupaciones constantes es cumplir a cabalidad con los reglamentos y ordenanzas establecidas en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, aun así, ocurren accidentes y tarde o temprano podrían volver a ocurrir; pues las actividades humanas y de la naturaleza no son susceptibles de un control total y absoluto. Siempre existirán factores que están fuera de todo control,



especialmente aquellos que tienen que ver con las motivaciones personales, la dedicación al trabajo y la influencia de elementos externos al trabajo, como las condiciones sociales, familiares, individuales, efectos de la naturaleza y otras, que determinan la conducta de los individuos frente al tema de la seguridad. Por ello, la falta de control de esos elementos no puede ser constitutiva de negligencia. La prevención de riesgos es una actividad que se funda en dos pilares básicos; La estructura, constituida por normas legales, administrativas, procedimientos internos, capacitación, instrucción, entrenamiento, elementos que, en algunos casos, efectivamente dependen del control del empleador; y el comportamiento de los individuos o hechos de la naturaleza, respecto de los cuales, el control o alineamiento por parte del empleador es bastante limitado y exiguu, por las razones antes señaladas.

Agrega que en primer lugar, cabe hacer presente que la demandante recibió oportunamente el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, comprometiéndose a respetarlo, cumplirlo y actuar con el máximo de preocupación, empleando el sentido común, tanto en su trabajo como fuera de este para evitar accidentes a su persona y a sus compañeros de trabajo.

Relata que en segundo lugar, el día del accidente la demandante se encontraba desarrollando sus funciones en forma normal, la dirección del establecimiento no le habría encomendado ninguna función excepcional o fuera de lo común que no sea de aquellas funciones propias de su cargo.

Manifiesta que en consecuencia, no es efectivo que su representada no haya dado cumplimiento a las normas de higiene y seguridad y no haya adoptado todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores y en particular respecto de la demandante, en cumplimiento de sus labores, sino que, por el contrario, además, conforme a las circunstancias en



que el accidente ocurriera hace que la responsabilidad de lo ocurrido es enteramente de la propia actora.

Sostiene que en primer lugar, se ha señalado que no basta la mera relación causal entre el hecho y el daño, sino que la responsabilidad del empleador depende necesariamente que el daño se produzca a causa de un hecho o una omisión negligente del mismo.

Expone que ahora bien, se ha dicho también que la distinción anterior no tiene cabida, pues se trata de un tipo de responsabilidad contractual, por lo tanto, para que se origine responsabilidad necesariamente se requiere que el empleador (deudor del deber de seguridad) provoque el daño a causa de una acción u omisión negligente. A menos que se trate de una obligación de resultado, en que sólo es posible alegar caso fortuito o fuerza mayor y ya no basta acreditar la diligencia, lo que sostiene, se reitera, que no corresponde en esta clase de responsabilidad. Así, la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N° 7249-2010, de manera unánime, lo ha establecido conforme a los considerandos, que se transcriben del modo siguiente “ Cuarto: Que, centrando la controversia, se tiene por discusión la naturaleza de la responsabilidad que la ley atribuye al empleador en las condiciones ya descritas y para dilucidarla, debe considerarse que en nuestra legislación, como es sabido, existe un seguro obligatorio que otorga al trabajador y a su familia cobertura contra los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, reconociéndoles ciertas prestaciones determinadas por la propia ley cuya regulación se contiene en la Ley N° 16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Según sus disposiciones, en la cual en el evento que el accidente se deba a culpa o dolo del empleador o de un tercero, la normativa concede dos acciones: Una al organismo asegurador para que repita en relación con los desembolso que haya asumido y, la otra, al trabajador, y a las demás personas a quienes el accidente cause daño para demandar los perjuicios consiguientes. Quinto: Que





en efecto, el artículo 69 de la Ley N° 16.744 prevé: Cuando el accidente se deba a dolo o culpa de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: b) la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. Sexto: Que la lectura de la norma precedente conduce a sostener que en nuestro ordenamiento jurídico la consagración de la responsabilidad del empleador en materia de accidentes laborales, corresponde a un sistema excepcional en la medida en que coexisten ese régimen legal específico -seguro obligatorio- conjuntamente con el general de responsabilidad civil; debiendo aplicarse las normas del derecho civil o común para la solución de asuntos como el planteado en esta causa, que exige, como fundamento básico de la acción el actuar o la omisión dolosa o culposa del demandado para que surja la obligación reparatoria, como asimismo, concurrencia de los demás requisitos necesarios para configurar tal responsabilidad. Séptimo: Que, en relación a lo antes expresado es preciso tener en cuenta además que el deber de cuidado del empleador se identifica en este caso con una obligación de seguridad, la que está expresamente contemplada y le impone el artículo 184 del Código del Trabajo que establece: El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales y su establecimiento no significa, en caso alguno, que el acreedor de la obligación deba quedar indemne, aún cuando la redacción de la norma pareciera así darlo a entender. Doctrinariamente se considera que dicha disposición se limita a enunciar un principio general en materia de obligaciones de seguridad



del patrono, sin regular un estatuto especial. Octavo: Que, en la línea de deducciones anotadas, se concluye que no se trata de una responsabilidad objetiva, sino de una que requiere de la culpa del empleador, la que, en general, se manifiesta por lo general en la omisión del deber de cuidado. Es decir, en la infracción a la obligación de seguridad, ya sea por acción u omisión, correspondiéndole acreditar a dicho empleador la adopción de las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud del trabajador, sin que pueda afirmarse indiscutiblemente si se trata de una obligación de medios o de resultado, dependiendo del caso de que se trate.”

Señala que en definitiva, coincidiendo con el criterio de la Excelentísima Corte Suprema, ésta no es una obligación de resultado, sino que se requiere necesariamente -como elemento de la responsabilidad- el dolo o culpa del empleador. Así, por lo demás lo establece el artículo 69 de la ley 16.744 esgrimida como fundamento en esta causa, la que hace surgir la responsabilidad del empleador cuando el accidente de deba a su culpa o dolo, y es más, no obstante que el sistema asegura a la víctima del accidente laboral el otorgamiento de las prestaciones que regula la ley 16.744 por su sola ocurrencia, no beneficia al trabajador que actuó con negligencia inexcusable, porque se le sanciona con una imposición de una multa y la posibilidad, incluso, conforme lo prevé el artículo 70 de la ley citada, la posibilidad que el organismo administrador de repetir en su contra por las prestaciones otorgadas, al no existir razón alguna para no comprenderlo en “...o terceros responsables del accidente...” a que alude la letra a) del artículo 69 del reseñado texto legal.

Indica que es menester hacer presente que la responsabilidad que corresponde es la leve (la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios y que se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano). Lo anterior, tal como se señalara con antelación, la responsabilidad del empleador surge del artículo 69 de la ley 16.744, donde el accidente se deba a su



culpa o dolo y en tal sentido, como lo previene el artículo 44 del Código Civil, culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve, que es precisamente, según dicha norma, la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, y que se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

Agrega que ahora bien, en lo que se refiere a la prueba, al tratarse en la especie de una responsabilidad contractual, no es el trabajador quien debe probar la negligencia del empleador sino que es este quien debe demostrar su diligencia en el actuar, o bien, que el daño se produjo no como consecuencia del riesgo que normalmente existe en el despliegue de la actividad laboral y/o por último, que se debió a negligencia sea esta inexcusable o no del trabajador o un hecho fortuito e imprevisible, todo esto, conforme al inciso tercero del artículo 1547 del Código Civil (la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo).

Relata que la contraria funda la acción principalmente en el artículo 184 del Código del Trabajo, ley 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y otras normas afines a la materia, preceptos que en verdad no han sido vulnerados en razón de todo lo expuesto y que por economía procesal se dan por reproducidos para todo efecto legal.

Manifiesta, respecto al concepto de daño moral, que éste no se encuentra definido en la legislación y se ha estimado por la doctrina que corresponde al sufrimiento físico y/o psicológico que hiere sentimientos de afección o de familia, que procede menoscabado y lesiona el espíritu, la honra y estima de persona y existe en caso que se ocasione un mal o perjuicio en lo relativo a las facultades espirituales o dolor o aflicción en los sentimientos. Sin perjuicio que la demandante deberá probar el daño moral que sostienen su libelo incluido la depresión y el motivo como su gravedad que ha experimentado como consecuencia del accidente del trabajo que



sufriera, del cual culpa a su representada, determinándolo en la suma exorbitante de \$60.000.000.-

Sostiene que en lo que respecta al daño moral demandado y para el caso que se determinare que hubiere un daño que le provoque incapacidad laboral permanente, que su mandante tiene responsabilidad culposa del accidente del trabajo que lo provocara, su determinación queda de acuerdo a la jurisprudencia a la valoración subjetiva que realice el Tribunal en la sentencia condenatoria y que debiera ser determinada por hechos objetivos en cuanto a la magnitud de las lesiones experimentadas y el grado de incapacidad que estas le provoquen y su aflicción consecuente, por todo lo cual se estima que el monto pretendido es excesivo y su monto cualesquiera que se pudiese determinar acorde con los criterios de prudencia y justicia resulta igualmente excesivo por lo que no se deberá acceder a dichos montos y deberá determinarlo el Tribunal, conforme a derecho y justicia.

Expone que más aún, derivado de todo lo expuesto en el anterior, no está claro, salvo pericias médicas o psiquiátricas, un monto tan elevado, debiendo ser en este sentido, el peso de la prueba de la demandante para acreditar la existencia del daño moral y su monto.

Señala que establecidos los hechos y los fundamentos de derecho necesarios para el rechazo en todas sus partes de la acción de autos, corresponde analizar los perjuicios demandados, y sobre todo el astronómico monto de los mismos.

Indica que se puede definir el daño como todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre una persona (natural o jurídica) en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc. Ampliando este concepto se puede decir que el daño constituye un elemento de la responsabilidad civil. En este sentido, determinado el concepto y el rol jurídico del daño, debe referirse a los



elementos o requisitos del daño reparable. La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia coinciden en los siguientes requisitos:

- a) El daño o perjuicio debe causarlo una persona (natural o jurídica) distinta del ofendido;
- b) El daño o perjuicio debe consistir en una turbación o molestia anormal;
- c) El daño debe provenir de la lesión a una situación lícita;
- d) El daño debe ser cierto, y
- e) El daño no debe estar reparado.

Agrega que todos y cada uno de estos elementos, como se demostrará, no concurren en la situación de autos, bastando para arribar a dicha conclusión la sola lectura de la exposición de hechos efectuados por esta parte.

Relata que los perjuicios o daños, siguiendo a la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, pueden clasificarse, en general, en daños materiales e inmateriales. A su vez los primeros pueden clasificarse en daños directos o indirectos. La segunda categoría de daño o perjuicios se conocen como daño moral. El concepto de daño moral, como ya se dijo, no ha sido definido en forma expresa por el legislador, pero la jurisprudencia reiterada de los Tribunales y la unanimidad de la doctrina reconocen su existencia, variando sólo en su extensión conceptual. Puede decir, que el daño moral, de acuerdo a la evolución que ha sufrido este concepto en Chile, excede de la *pretium doloris*, vale decir “el precio del llanto”, en otras palabras el daño moral existe cuando se ocasiona un mal, perjuicio o aflicción en lo relativo a facultades espirituales, un dolor o aflicción a los sentimientos.

Manifiesta que en la actualidad la tesis que predomina con mayor fuerza en los círculos forenses es aquella que concibe el daño moral como aquel que lesiona derechos o intereses extrapatrimoniales de la víctima, siendo indiferente, pero no excluyente la *pretium doloris*.

Sostiene que reflejo positivo de esta concepción del daño se encuentra en la Constitución Política, que contempla como garantía



constitucional, el derecho a la honra de las personas, entre otras. Esta protección constitucional implica o significa que la lesión o agravio de los intereses no pecuniarios también debe ser indemnizado por quien los lesiona y que la reparación de los perjuicios extrapatrimoniales debe aceptarse en cualquier ámbito de la responsabilidad civil, sea lega, contractual o extracontractual.

Expone que ahora bien, debe dejar claramente establecido que el daño moral no incluye el daño patrimonial, no alterando su carácter de extrapatrimonial la circunstancia que de la lesión de sus intereses o atributos insustituibles por un valor en dinero produzca, consecuentemente, un daño directamente patrimonial.

Señala que fundamenta dicho daño en una serie de consecuencias, tales como el sufrimiento provocado por las lesiones (las directas e indirectas), su edad, la angustia y la limitación que le ha significado en el ámbito laboral y personal, que lo tendrían así para el resto de su vida.

Indica que como se ha señalado en el cuerpo de este escrito, las afirmaciones realizadas sublite resultan absolutamente inexactas, toda vez que la actora, no ha visto comprometido su futuro económico bajo ningún punto de vista, ya que como lo ha señalado actualmente sigue trabajando para la Municipalidad de Tucapel, y se desempeña normalmente.

Agrega que asimismo, hace presente que las lesiones sufridas por la trabajadora en relación con la desproporcionada cantidad demandada, colisiona con el promedio general que, bajo la discreción y prudencia judicial, ha uniformado la jurisprudencia en la materia.

Relata, en cuanto a la certeza del daño, que por su relevancia es muy importante destacar y hacer hincapié al Tribunal que la indemnización de perjuicios busca reparar el daño sufrido, pero en ningún caso puede convertirse en una instancia de lucro para el afectado. En tal sentido, al momento de demandar indemnización de perjuicios, se debe ser cauteloso en orden a acreditar de manera



sólida aquellas partidas que se cobran, ya que se indemnizarán sólo aquellos daños acreditados.

Manifiesta que siguiendo las dos ideas anteriores llama poderosamente la atención lo abultado que resulta el monto de la indemnización solicitado por la actora por daño moral. De ahí que convenga recordar que en la determinación del monto de la indemnización, debe existir una mínima proporcional entre el daño sufrido y su reparación. Al respecto el profesor Alessandri sanciona que “como la víctima tiene derecho a ser restituida al estado en que se hallarían antes del incumplimiento, es justo darle lo que necesite con ese objeto; solamente así la reparación será completa.”

Sostiene que tomando lo expuesto sublite, resulta meridianamente claro que la indemnización demandada escapa a dicho fin, constituyendo un mero ejemplo de enriquecimiento sin causa. Luego, no existiendo siquiera una declaración de pérdida de su capacidad de ganancia como lo pretende estimar la actora, desproporcionada resulta la suma demandada.

Expone que asimismo, la indemnización por daño moral demandada parece del todo improcedente y exagerada, por los poderosos argumentos dados con anterioridad. Ergo, su representada al no tener responsabilidad alguna en la infracción al deber general de seguridad hecha valer en el libelo en los términos prescritos en el artículo 184 del Código del Trabajo, no corresponde hacerse cargo de los pormenores en la merma física y/o psíquica que podría experimentar la trabajadora demandante.

Señala que ahora bien, es necesario hacer presente que la demandante tiene cincuenta y siete años de edad, restándole sólo tres años para obtener su jubilación. Por otra parte, el daño corporal definitivo o incapacidad laboral declarada por la Asociación Chilena de Seguridad es de un doce coma cinco por ciento, es decir, se trata de una persona con posibilidad cierta de volver a desempeñar funciones en el establecimiento educacional.



Indica que además, actualmente la demandante goza de licencia médica percibiendo mensualmente la totalidad de las remuneraciones.

Agrega que en conclusión, el perjuicio demandado no sólo resulta excesivo, sino que además improcedente, por no existir responsabilidad alguna de su representada en los hechos.

Relata que en subsidio de todas las alegaciones formuladas en el presente libelo, y para el improbable evento que el Tribunal estime que a su representada, le asiste responsabilidad en el accidente del trabajo en cuestión, solicita acorde con todos y cada uno de los antecedentes expresados precedentemente, los que se dan por expresamente por reproducidos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2320 del Código Civil, se reduzca considerablemente la apreciación de los perjuicios por daño moral por haberse expuesto la actora imprudentemente al daño sufrido.

Finalmente manifiesta que asimismo, se debe hacer presente al Tribunal que como se señaló en la presente contestación y en la propia demanda deducida, se deberá tener presente al momento de reducirse los montos indemnizatorios, todas las sumas de dinero o cantidades ya percibidas o que hubiere percibido la actora previamente a su determinación así como considerar en ello la actuación de su representada en el incidente ocurrido y que provocara a la trabajadora demandante y en el evento de que se estime que existiere responsabilidad de su mandante en esta causa.

**TERCERO:** Que en la audiencia preparatoria se establecieron los siguientes hechos no controvertidos:

- a) Que la demandante doña Marina Oneth Cuevas Mera desempeñaba funciones como paradocente en el liceo A-59 de esta ciudad, prestando servicios desde el 01 de marzo de 2002.
- b) Que el 05 de agosto de 2019 la demandante doña Marina Oneth Cuevas Mera sufrió un accidente laboral mientras desempeñaba sus funciones al tropezar con una cubrejunta de aluminio adherida del piso





de la puerta de una de las salas de clases del establecimiento educacional A-59 de esta comuna.

**CUARTO:** Que en la audiencia de juicio la demandante produjo la siguiente prueba:

**1.- DOCUMENTAL:** a) Certificado de término de reposo laboral de la actora, emitido el 19 de noviembre de 2019 por la Asociación Chilena de Seguridad.

b) Epicrisis de la demandante, emitido el 29 de agosto de 2019 por la Asociación Chilena de Seguridad.

c) Salida de medicamentos correspondiente a la actora, emitido el 21 de agosto de 2019 por la farmacia de la Asociación Chilena de Seguridad.

d) Resumen informativo de paciente correspondiente a la demandante, emitido por la Asociación Chilena de Seguridad.

e) Informe médico de atención practicada a la actora el 05 de agosto de 2019 en la Asociación Chilena de Seguridad.

f) Boletas de honorarios de 22 de noviembre, 20 de diciembre de 2019 y 20 de enero de 2020, emitidas a nombre de la demandante por el médico psiquiatra don Hermann Appelt Vega.

**2.- CONFESIONAL:** Compareció a absolver posiciones en representación de la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles, don Raúl Francisco Fuentes Pereira, quien, previamente juramentado en forma legal, declara lo que consta en audio.

**3.- TESTIMONIAL:** a) Doña María Eugenia Rivera Oñate, cédula nacional de identidad número 11.241.298-0, domiciliada en calle Colo Colo interior departamento número 314 de la villa Balmaceda de esta ciudad, cincuenta y dos años de edad, paradocente, quien, previamente juramentada legalmente, declara lo que consta en audio.

b) Doña Nataly Carolina Villegas Cuevas, cédula nacional de identidad número 16.982.398-7, domiciliada en calle Sargento Aldea número 372 de la comuna de Tucapel, treinta y dos años de edad, docente,



quien, previamente juramentada legalmente, declara lo que consta en audio.

**4.- EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS:** La demandada exhibió los siguientes instrumentos:

a) Anexo de contrato de trabajo celebrado el 24 de febrero de 2003 entre doña Marina Onetth Cuevas Mera, como trabajadora, y la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles, como empleadora, en que se deja constancia que la relación laboral tiene carácter indefinido.

b) Informe técnico del accidente del trabajo padecido por la demandante, elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad.

c) Declaración individual de accidente del trabajo sufrido por la actora, efectuada el 05 de agosto de 2019 por la demandada ante la Asociación Chilena de Seguridad.

Se hizo efectivo el apercibimiento contemplado en el número 5 del artículo 453 del Código del Trabajo por no exhibir la demandada el registro de capacitaciones para el trabajo de parodocente y la inducción al Derecho a Saber, realizadas a la demandante.

**5.- OFICIOS:** Asociación Chilena de Seguridad, emitido el 27 de agosto de 2020 que remite informe técnico investigación de accidente, listado medicamentos, informe antecedentes médicos y ficha médica de la actora.

**QUINTO:** Que por su parte la demandada hizo comparecer a estrados a los siguientes testigos:

a) Doña Juana Emérita Huentén Díaz, cédula nacional de identidad número 10.245.965-2, domiciliada en calle Blanco Encalada número 480 de esta ciudad, cincuenta y ocho años de edad, parodocente, quien, previamente juramentada legalmente, declara lo que consta en audio.

b) Don Andrés Iván Contreras Gutiérrez, cédula nacional de identidad número 6.737.144-K, domiciliado en calle Almagro número 865 de esta comuna, sesenta y ocho años de edad, profesor, quien, previamente juramentado legalmente, declara lo que consta en audio.



c) Don Eduardo Karim Giacaman Espinoza, cédula nacional de identidad número 9.108.008-7, domiciliado en avenida Oriente número 784 de esta ciudad, cincuenta y ocho años de edad, profesor, quien, previamente juramentado legalmente, declara lo que consta en audio.

**SEXTO:** Que ambos litigantes formularon sus observaciones a la prueba rendida y sus conclusiones a la misma.

**SÉPTIMO:** Que para un mejor acierto de la sentencia es necesario recordar que doña Marina Onetth Cuevas Mera dedujo demanda por indemnización de perjuicios en contra de la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles, derivada de un accidente del trabajo acaecido el 05 de agosto de 2019 que sufrió, en su concepto, producto de la infracción de la demandada al deber de seguridad consagrado en el artículo 184 del Código del Trabajo y que le ocasionó una fractura cerrada de humero proximal izquierdo, epífisis superior cerrada, fractura cerrada olecranon derecho, rigidez articular leve de codo derecho y dolor crónico leve de codo derecho, pretensiones que la empleadora solicita sean desestimadas al haber cumplido todas las normas de prevención de riesgos asociadas a las labores que realizaba la trabajadora, además de que el accidente se debió al actuar imprudente y descuidado de esta última.

**OCTAVO:** Que de lo expuesto en la contestación al libelo se infiere que la demandada no niega la existencia de las lesiones padecidas por la demandante, discrepando sólo en la atribución que se le hace de la responsabilidad en su acaecimiento, al señalar que el accidente laboral se debió a un tropiezo a causa de su desplazamiento sin el debido cuidado y atención.

**NOVENO:** Que en este orden de ideas, es conveniente precisar que de la documental aparejada consistente en el certificado de término de reposo laboral, de la epicrisis de la demandante, salida de medicamentos, del resumen informativo de paciente, del informe médico de atención, todos correspondientes a la actora y emitidos por la Asociación Chilena de Seguridad, a lo que debe adicionarse el



relato del absolvente don Raúl Fuentes Pereira, de las testigos doña Marta Rivera Oñate, doña Nataly Villegas Cuevas y del oficio evacuado por la citada Asociación Chilena de Seguridad, dimana que aproximadamente a las 10:30 horas del 05 de agosto de 2019, mientras la actora trasladaba libros de asistencia de una sala de clases hasta la oficina en que prestaba servicios, tropezó con una cubrejunta de aluminio adherida al piso de la puerta de la sala, lo que le provocó una caída, golpeándose con el muro de la dependencia y posteriormente con el suelo de dicha dependencia.

**DÉCIMO:** Que precisado lo anterior cabe destacar que se ha entendido que como una consecuencia del contenido ético jurídico del contrato de trabajo grava a la empleadora, desde el momento en que dicho vínculo contractual se perfecciona, el deber de protección y la consiguiente obligación de seguridad en favor de la trabajadora, de tal manera que aquélla es una deudora de seguridad respecto de sus dependientes.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que en este sentido, una de las consagraciones positivas del ya referido deber de protección es el artículo 184 del Código del Trabajo, precepto que impone a la empleadora la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores lo que se traduce en que debe mantener a disposición de éstos los implementos que sean necesarios para prevenir todo tipo de accidentes.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que a la luz de lo razonado se debe por consiguiente determinar, por un lado, si hubo culpa o negligencia de parte de la demandada en el accidente del trabajo en que se vio involucrado la actora y, por otro, si se cumplían todas las normas de seguridad necesarias para el desarrollo de las labores ejecutadas.

**DÉCIMO TERCERO:** Que a fin de resolver dicha interrogante debe tenerse presente como premisa principal que la responsabilidad en caso de accidentes del trabajo ocurridos a una dependiente dice relación directa con normas y medidas de seguridad que la



empleadora debió adoptar y cumplir, conforme con las prescripciones de la ley, en el lugar físico de las faenas, en sus instalaciones y en el sitio de labores, además de la necesaria obligación y deber de supervisión directa en el desarrollo de tales actividades o faenas, lo que se traduce en que ésta, para entender cumplida la obligación de seguridad para con sus trabajadores, debía en primer término detectar y controlar los riesgos presentes en su área de funciones y, consecuentemente con ello, eliminarlos o tomar las medidas destinadas a prevenir los resultados lesivos para sus dependientes.

En otras palabras, según don Cayetano Núñez González en su obra “Prevención de Riesgos Laborales en Chile. Alcance y Contenido del Artículo 184 del Código del Trabajo”, Editorial Librotecnia, Primera Edición, diciembre de 2013, página 90, “El deber de seguridad, “adoptar todas las medidas necesarias”, se extiende a toda la acción preventiva, debiendo hacer todo lo necesario en cada una de las obligaciones específicas, incluso cuando no estén previstas de modo expreso. La norma preventiva contiene verdaderos tipos de conductas, a los que, por sus características, no cabe exigir mayor concreción, puesto que no se refieren a datos específicos sobre mecanismos especiales de seguridad, sino a comportamientos relativos al eficaz empleo de los mismos, cuya infinita versatilidad no puede materialmente ser objeto de mayores concreciones en su descripción.

Ante la vacilación respecto de estos conceptos abiertos y su concreta materialización, es conveniente no perder de vista que el mandato de proteger eficazmente tiene un dilatado alcance, porque, insisto, va más allá de lo meramente formal. Lo que pretende la imprecisión de la deuda general de seguridad es llegar más lejos que las obligaciones específicas y técnicas, prolongando su alcance en la diligencia empresarial de adoptar todas las medidas necesarias, en una comprensión material de la obligación protectora. Cubre los posibles vacíos existentes en la norma, así como su obsolescencia, permitiendo una adecuación constante. Esta clave interpretativa



impone el uso de las medidas que, aun cuando no estén contempladas de manera expresa, existan para riesgos similares y puedan ser analógicamente aplicadas o, simplemente, sean de fácil deducción en la aplicación diligente de los conocimientos técnicos exigibles.”

**DÉCIMO CUARTO:** Que de lo antes reseñado se desprende que el incumplimiento de la obligación de seguridad consagrada en el citado artículo 184 del Código del Trabajo importa que la culpa de la empleadora se presume, por aplicación de las normas generales de responsabilidad contractual, por lo que le corresponde demostrar que adoptó todas las medidas necesarias para evitar que se produjese el accidente, además de desplegar la diligencia debida en la práctica de las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo, o que dicho accidente se debió a un caso fortuito, fuerza mayor o a culpa de la víctima y, si no lo lograra, se tendrá por establecido un incumplimiento culpable de su parte.

**DÉCIMO QUINTO:** Que a la luz de lo expresado por la demandada al contestar el libelo deducido en su contra, esto es, el debido cumplimiento de todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y salud de sus dependientes, además de que el accidente laboral se debió al actuar imprudente y descuidado de la demandante, debe tenerse presente que para que esta última conducta tenga relevancia en la producción del daño como factor de exoneración total de responsabilidad de la empleadora, es menester que concurra en la especie no sólo un comportamiento activo imprudente de la trabajadora sino también además que dicho actuar tenga el mérito de constituirse como causa exclusiva del perjuicio, o alternativamente, sin llegar a tener dicha entidad, al menos concurra a producirlo.

**DÉCIMO SEXTO:** Que establecido lo anterior, corresponde dilucidar la existencia de la responsabilidad atribuida por la trabajadora a la demandada en el acaecimiento del accidente laboral en estudio,



debiendo en primer término considerarse que la actora debía como paradocente, entre otras funciones, recoger los libros de asistencia de las salas de clases para ingresar los antecedentes respectivos al sistema, según refirieron en estrados los testigos doña Marta Rivera Oñate, doña Nataly Villegas Cuevas, doña Juana Huentén Díaz y don Andrés Contreras Gutiérrez.

Para estos efectos, y considerando por un lado, que la actora sufrió un accidente del trabajo mientras ejercía las funciones que le estaban asignadas contractualmente y, por otro, la forma en que ocurrió el siniestro laboral en análisis, debe determinarse entonces si la empleadora adoptó las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de las mismas.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que en este sentido, en el informe técnico del accidente del trabajo elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad se consignan como sus causas inmediatas, la falta de atención al desplazarse caminando por el interior del establecimiento, y como sus causas básicas, presencia de desnivel en el ingreso de la sala de clases, determinándose como medidas correctivas, realizar diálogo de seguridad sobre prevención de caídas a todos los trabajadores y reparar desnivel en el ingreso a sala de clases, respectivamente.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que conforme a lo anterior, puede inferirse entonces que el accidente laboral en análisis se debió a la existencia de un desnivel producido por una cubrejunta de aluminio que no estaba íntegramente adherida al piso de una de las salas de clases a la que debía ingresar la demandante a fin de retirar los libros de asistencia del establecimiento educacional en que prestaba servicios, lo que le provocó un tropiezo y su posterior caída.

La conclusión precedente encuentra sustento en el hecho de que el informe técnico del accidente del trabajo elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad consigna dicha irregularidad como su causa básica la concurrencia del citado desnivel, ordenándose su



corrección dentro del plazo de veintiún días de terminada la reseñada indagatoria, lo que fue cumplido a satisfacción por la demandada según expresó en estrados doña Nataly Villegas Aldea.

**DÉCIMO NOVENO:** Que sin perjuicio de lo anterior, también debe considerarse que el tantas veces citado informe técnico evacuado por la Asociación Chilena de Seguridad refiere como causa inmediata, la falta de atención al desplazarse caminando por el interior del establecimiento, e incluso se dispuso a título de medida correctiva, realizar diálogo de seguridad sobre prevención de caídas a todos los trabajadores, fijándose un plazo de diez días para impartir dicha charla, conclusión que aparece refrendada, por un lado, por el testimonio de doña Marta Rivera Oñate al expresar que la demandante no vio el desnivel existente en la sala de clases, siendo por ello que tropezó, y, por otro, por el relato de doña Juana Huentén Díaz (también parodocente del liceo A-59 de esta ciudad), al indicar que el día del accidente, tanto ella como la demandante estaban retirando libros de asistencia, y que salió de la sala de clases caminando delante de la actora, por lo que sólo se percató que ésta había caído, de lo que se infiere que transitó por el mismo lugar que la trabajadora sin que nada le ocurriese.

**VIGÉSIMO:** Que establecido lo anterior, debe determinarse entonces si el actuar de la demandante (falta de atención al desplazarse caminando por el interior del establecimiento) tiene el mérito de constituirse en la causa exclusiva que originó el accidente laboral en análisis, debiendo recordarse al efecto que para que la conducta de la víctima tenga relevancia en la producción del daño como factor de exoneración total de responsabilidad de la empleadora, es menester no sólo un comportamiento activo imprudente de la dependiente sino también además que dicho comportamiento tenga el mérito de constituirse como causa exclusiva del perjuicio, o alternativamente, sin ser causa exclusiva del daño, al menos concurra a producirlo.





Al respecto conviene citar a don Jorge Baraona González, en su artículo “Responsabilidad Civil del Empresario por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”, Cuadernos de Extensión Jurídica, Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, año 2011, Tomo XX, página 168 “En materia de accidentes del trabajo, la indagación por la relevancia del comportamiento de la víctima en la producción del hecho dañoso obliga a relacionar funcionalmente lo que la víctima hizo, considerando lo que debió hacer (y que le era posible) en el contexto de lo que el empleador, a su vez, pudo y debió hacer por controlar la imprudencia de los trabajadores.

Es evidente que la imprudencia de la víctima en el marco de un accidente del trabajo debe ser contrastada con la actuación de su empleador, básicamente porque sobre éste recae la seguridad en el trabajo, y por lo mismo -como ya dije- el empleador no sólo debió prever o precaver los accidentes que podrían producirse en su empresa, y en función de ellos capacitar a los trabajadores.”

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que en este punto resulta relevante considerar, amén de los ya señalados desnivel del piso de la sala de clases y la falta de atención al desplazarse por parte de la actora, la eventual vigilancia, o si se quiere prevención, respecto del actuar de la trabajadora que podía efectuar la empleadora.

Al respecto, en concepto de este Tribunal, no resulta plausible entender que la demandada estaba en posición de supervigilar el desplazamiento de sus trabajadores dentro del establecimiento educacional (y por consiguiente de precaver eventuales descuidos al efecto), en términos tales de fiscalizar que éste se ejecutase con la debida atención a las circunstancias y condicionantes medioambientales del momento.

En este orden de ideas, si bien es cierto se aplicó respecto de la demandada el apercibimiento legal debida a la ausencia de un procedimiento de trabajo seguro y de la inducción del derecho a saber los riesgos que entrañaban las labores desempeñadas por la actora,



no es menos verdad que ello no altera lo precedentemente razonado dado que, aun de existir dichas capacitaciones y procedimientos, de todas formas el accidente laboral se habría producido atento las consideraciones precedentes.

La conclusión anterior encuentra sustento en que la debida atención en los desplazamientos no requiere de consagración normativa para su debida incorporación al quehacer diario de los trabajadores, al tratarse de una premisa de sentido común. Refrenda lo anterior el relato de doña Marta Rivera Oñate en orden a que cada paracentista determina la cantidad de libros de asistencia que traslada en sus brazos desde las salas de clases a su oficina, afirmación de la que se infiere que dicha decisión está determinada en relación a un número que permita el correcto desplazamiento, o en otras palabras, que no se dificulte la visión de quien transporta los citados registros, más aun cuando, según la misma deponente, dichos libros son pesados (setecientos u ochocientos gramos cada uno de acuerdo al relato de doña Nataly Villegas Cuevas) y la distancia a recorrer es aproximadamente cien metros.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que de acuerdo a lo antes expresado, no obstante entenderse que en el acaecimiento del accidente del trabajo de la actora el municipio demandado incumplió la obligación de seguridad para con sus dependientes en razón de que no previó los riesgos que entrañaba la existencia de una cubrejuntas mal adherida al piso del suelo de una de las salas de clases del establecimiento educacional liceo A-59 de esta ciudad y no adoptando en consecuencia medidas preventivas para evitarlos, cabe considerar lo razonado en los fundamentos precedentes en orden a la existencia de la falta de cuidado de la trabajadora durante el cumplimiento de sus labores.

En efecto, si bien es cierto en el motivado décimo noveno se describió el descuido actuar de la demandante al momento del accidente del trabajo analizado, lo que permite inferir que ello



constituye una conducta negligente en su acaecimiento, no es menos verdad que, de acuerdo a lo razonado en el basamento precedente, debe entenderse que ha existido un incumplimiento de la obligación de seguridad de la demandada para con sus dependientes, motivo por el que dicho actuar de la trabajadora, no obstante carecer del mérito de constituirse como causa exclusiva del daño padecido, concurrió a producirlo, razón por la que se hará lugar a la demanda de indemnización de perjuicios, sin perjuicio de que se rebajará el monto de la partida indemnizatoria atento que la víctima se expuso imprudentemente al perjuicio padecido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil.

Útil al respecto resulta citar a doña Ruth Gabriela Lanata Fuenzalida en su obra “Responsabilidad Contractual y Extracontractual por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”, Cuadernos Jurídicos de la Academia Judicial, año 2019, página 227, quien, citando una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, refiere “La Corte Suprema ha señalado que el artículo 2330 del Código Civil opera en el entendido de que el resultado nocivo es consecuencia del actuar tanto del autor del ilícito como de la víctima, y se traduce en la reducción del monto de la indemnización en atención a que la víctima se expuso imprudentemente al daño. La norma exige, para que sea procedente la reducción, que la víctima haya contribuido a su producción en virtud de una acción u omisión negligente, configurando un fenómeno de concausas. Se requiere que el daño sea el resultado simultáneo de ambos sujetos, aunque sus acciones puedan tener intensidades diversas. Y es en virtud de esta intervención convergente de ambos involucrados en el hecho ilícito que resulta procedente la rebaja de la cuantía del resarcimiento. Por otra parte, el efecto de atenuación que tiene la culpa de la víctima se basa en que no resulta legítimo que el autor del daño repare la totalidad de aquel que la víctima contribuyó a causar.”



**VIGÉSIMO TERCERO:** Que así las cosas, establecida, con la morigerante antes reseñada, la responsabilidad de la demandada en el acaecimiento del accidente padecido por la actora el 05 de agosto de 2019 a consecuencia del cual sufrió una fractura cerrada de humero proximal izquierdo, epífisis superior cerrada, fractura cerrada olecranon derecho, rigidez articular leve de codo derecho y dolor crónico leve de codo derecho, corresponde dilucidar la procedencia de la partida indemnizatoria pretendida en el libelo por concepto de daño moral.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que la demandante en su libelo impetró el pago de la suma de \$60.000.000 por concepto de daño moral por los perjuicios corporales, emocionales y estéticos padecidos como consecuencia del accidente del trabajo sufrido.

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que se ha entendido que el daño moral corresponde al dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. También se ha dicho que es aquél proveniente de toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva a las facultades espirituales, a los afectos o a las condiciones sociales o morales inherentes a la personalidad humana.

En relación a lo anterior cabe traer a colación el texto del artículo 69 de la ley 16.744, precepto que incluye el daño moral entre las indemnizaciones que pueden impetrarse de la empleadora en razón del incumplimiento de su deber de protección de la vida y seguridad de sus dependientes en el desempeño de sus funciones.

**VIGÉSIMO SEXTO:** Que precisado lo anterior, es necesario considerar que el daño moral es de índole subjetivo, siendo por tanto su apreciación pecuniaria entregada a la estimación discrecional del juzgador, quien, en todo caso, deberá tomar en cuenta parámetros objetivos para evaluarlo, tales como la edad de la actora, su actividad, las secuelas padecidas, las circunstancias en el acaecimiento del accidente, etc.



**VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que en la especie, naturalmente puede inferirse que produce a una persona un pesar el hecho de sufrir las lesiones descritas en el fundamento vigésimo tercero con la consecuencia lógica de todas las molestias y dificultades que ello conlleva, además de las limitaciones que debió y deberá enfrentar en sus actividades físicas, laborales y familiares, más aun cuando la demandante permaneció con reposo laboral entre el 05 de agosto y el 22 de noviembre de 2019, es decir, durante ciento diez días, de los cuales estuvo hasta el 29 de agosto de 2019 hospitalizada, según se infiere de la ficha clínica de la Asociación Chilena de Seguridad.

Íntimamente relacionado con lo anterior, de los relatos de las testigos doña Marta Rivera Oñate y doña Nataly Villegas Cuevas, es posible inferir que la actora actualmente no puede peinarse, lavarse los dientes o trabajar en repostería y que emocionalmente “no quedó bien”, por lo que estuvo en tratamientos psicológicos y psiquiátricos entre dos y tres meses, lo cual por lo demás resulta refrendado por las boletas de honorarios de 22 de noviembre, 20 de diciembre de 2019 y 20 de enero de 2020, emitidas a nombre de la demandante por el médico psiquiatra don Hermann Appelt Vega.

De esta manera los antecedentes vertidos en los párrafos precedentes, implican un daño moral que exige ser reparado en un monto que este juzgador evaluará prudencialmente en la suma de \$10.000.000.-

En nada atenta a lo precedente expresado la circunstancia de que la demandante se encuentre actualmente trabajando y que se desplace normalmente sin utilizar elementos ortopédicos al efecto, como refirieron los testigos doña Juana Huentén Díaz, don Andrés Contreras Gutiérrez y don Eduardo Giacaman Espinoza, ya que ello no es óbice a la concurrencia del daño moral antes cuantificado.

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Que la cantidad ordenada pagar devengará intereses y reajustes según la variación que experimente el



índice de precios al consumidor, en ambos casos desde que la presente sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo.

**VIGÉSIMO NOVENO:** Que las demás pruebas rendidas no serán consideradas para los efectos de la resolución de la presente controversia dado que en nada alteran lo razonado en estos antecedentes.

**TRIGÉSIMO:** Que las pruebas rendidas han sido apreciadas y valoradas conforme a las reglas de la sana crítica.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 184, 446 y siguientes, 453 y 454 del Código del Trabajo; artículo 2330 del Código Civil, ley 16.744, se declara:

I.- Que se acoge la demanda de indemnización de perjuicios derivada de un accidente del trabajo deducida por doña Marina Onetth Cuevas Mera en contra de Ilustre Municipalidad de Los Ángeles, representada legalmente por su Alcalde don Esteban Krause Salazar, sólo en cuanto se ordena a la demandada cancelar a la actora la suma de \$10.000.000 (diez millones de pesos) por concepto de daño moral.

II.- Que la cantidad ordenada pagar devengará intereses y reajustes, según la variación que experimente el índice de precios al consumidor, en ambos casos desde que la presente sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo.

III.- Que no se condena en costas a la demandada por no resultar totalmente vencida en estos antecedentes.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rit N° O-100-2020

Ruc N° 20-4-0255519-0

Téngase por notificados de esta sentencia a los litigantes atendido lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 457 del Código del Trabajo.

**DICTADA POR DON SERGIO YÁÑEZ ARELLANO. JUEZ  
TITULAR DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LOS  
ÁNGELES.**

